



SALA TERCERA DE DECISION LABORAL

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Amanda María Domínguez Porras
DEMANDADO	Universidad de Antioquia
PROCEDENCIA	Juzgado Sexto Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 006 2018 00617 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 120 de 2021
TEMAS Y SUBTEMAS	Si en convención colectiva de trabajo 1976-1977 suscrita entre la universidad de Antioquia y el sindicato de trabajadores de la entidad, se incorporó el parágrafo tercero del artículo 1 de la ley 4 de 1976 que habla de un aumento anual de la pensión de jubilación del 15%
DECISIÓN	Confirma sentencia absolutoria

En la fecha, **treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los magistrados: Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento en grado jurisdiccional de consulta en favor de la señora **Amanda María Domínguez Porras**, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario que promoviera contra la **Universidad de Antioquia**. Radicado único nacional 05001 3105 **006 2018 00617** 01.

La Magistrada ponente en acatamiento de lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 del 04 de junio de 2020, en concordancia con los Acuerdos del Consejo Superior y Seccional de la Judicatura, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto, estudiado,

discutido y aprobado en sala virtual mediante acta **Nº 021**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación.

Antecedentes

Pretende la demandante se declare que, como titular de pensión de jubilación reconocida por la Universidad de Antioquia, tiene derecho al reajuste anual, a partir del 2000, y por los años subsiguientes, con un porcentaje del 15%, peticionando condena por el mismo en forma retroactiva, costas y agencias en derecho.

En sustento de sus pretensiones indica que estuvo vinculada mediante contrato de trabajo ficto con la Universidad de Antioquia, en calidad de trabajadora oficial, entre el 16 de mayo de 1975 y 29 de junio de 1995 cuando egresó para disfrutar de pensión convencional; que el artículo 15 de la convención colectiva establece: *“A partir de la vigencia de la presente convención, la universidad reconocerá a los trabajadores pensionados por invalidez y jubilación, el subsidio familiar, se beneficiaran de la distribución de los remanentes de que trata la convención de 1975 en el capítulo quinto; el servicio médico familiar de que trata el capítulo quinto de esta convención, las primas de junio y navidad; los auxilios por maternidad, entierro, útiles escolares, y para estudio y becas. Igualmente la universidad dará cumplimiento a la ley 4ª de enero 21 de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilación.”*; que la Ley 4 de 1976, consagró en el artículo 1, el derecho al reajuste anual de las pensiones de jubilación e invalidez, tanto de naturaleza pública como privada y en forma expresa a través del párrafo tercero, fijó el porcentaje mínimo del aumento que tendrían las pensiones, indicando que en ningún caso el reajuste de que trata este artículo será inferior al 15% de la respectiva mesada pensional, para las pensiones equivalentes hasta un valor de 5 veces el salario mensual mínimo legal más alto; que para el momento del reconocimiento de la pensión, se encontraba vigente esta cláusula, en virtud de la cual se adoptó la Ley

4 de 1976 como norma convencional, la cual no ha sido modificada, anulada o sustituida por acuerdos convencionales; que la universidad ha dado cumplimiento a la misma, excepto en relación con el párrafo tercero del artículo 1 de la Ley 4ª de 1976 referido al porcentaje mínimo de aumento anual de la pensión de jubilación del 15%, sin que la mesada de la demandante haya superado en ninguna anualidad el equivalente a cinco salarios mínimos, relaciona los porcentajes que se le han aplicado para el reajuste de mesada y la diferencia existente, cuantificando luego la misma. Puntualiza que con escrito del 7 de octubre de 2013 formuló reclamación administrativa, en procura de obtener la reliquidación y pago de los reajustes causados desde 2000, cumpliendo así el requisito de procedibilidad.

En auto del 28 de enero de 2019 se admitió y ordenó dar trámite a la acción, debidamente notificada la entidad accionada, allegó contestación aceptando la vinculación laboral de la demandante, pero no mediante contrato ficto; admite el reconocimiento de pensión de jubilación convencional, el contenido de la cláusula 15 de la convención colectiva, precisando que la misma señala que ***la Universidad dará cumplimiento a la Ley 4 del 21 de enero de 1976***, y ante su derogatoria se debió dar aplicación a la norma general, es cierto el ajuste a pensiones fijado en la referida norma e igualmente que la U. de A. no aplica tal incremento por encontrarse tal disposición derogada, sino el dispuesto por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, sin que se adeude diferencia alguna por reajuste pensional. Los demás supuestos son ciertos. **Se opuso** a la prosperidad de las pretensiones. **Formuló como excepciones** las que denominó: adecuada interpretación de la convención por parte de la Universidad, inexistencia de la obligación de incremento del 15% a cargo de esa entidad, buena fe y prescripción.

La primera instancia **terminó con sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito** en la que absolvió a la demandada de las pretensiones incoadas en su contra, e impuso costas a cargo de la actora y en favor de la Universidad.

Argumentó la falladora que la Convención Colectiva de trabajo en ninguno de sus apartes creo obligación expresa y autónoma a cargo de la Universidad, tendiente a que en adelante y de manera anual se aumentaría la pensión en un 15%, pues, lo que se dispuso fue que la entidad se atendería, frente al aumento de la prestación, a lo establecido en la Ley 4 de 1976, normativa que dejó de existir al ser derogada, cesando, con ello, la obligación de la Universidad de efectuar dicho incremento, quedando supeditada al no hallar fundamento legal ni convencional que imponga la obligación de acrecentar anualmente y de manera vitalicia la pensión de jubilación en un 15%, a lo establecido en la Ley 100 de 1993.

Al ser la decisión adversa a los intereses del demandante y no haberse interpuesto recurso de apelación, se conoce de la misma en el grado jurisdiccional de consulta en los términos del artículo 69 del C.P.T y la S.S.

Dentro de la oportunidad para presentar **alegaciones** ante esta instancia se allegó escrito por parte de **la Universidad de Antioquia**, indicando que el texto de la convención colectiva de trabajo no introdujo el contenido de la Ley 4 de 1976, pues, se limitó a hacer una referencia normativa, y siendo derogada la misma, tiene que correr la misma suerte la disposición remitida, es por ello, que la entidad ha venido ajustando las pensiones a su cargo, con lo regulado en la norma vigente, es decir, inicialmente la Ley 71 de 1988 y con posteriormente el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

En orden a resolver, basten las siguientes,

Consideraciones

Se aceptó por la Universidad de Antioquia la vinculación de la demandante como trabajadora oficial, entre 16 de mayo de 1975 y el 29 de junio de 1995, reconociéndole a partir del 30 de junio de esta anualidad la pensión de jubilación consagrada en el artículo 14 convención colectiva de trabajo 1976 – 1977, en la que se acordó que la U. de A. daría cumplimiento a la Ley 4 de 1976 en cuanto a reajuste anual de pensiones de invalidez y jubilación, sin aplicar este incremento, sino el ajuste dispuesto por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

Atendiendo el grado jurisdiccional de consulta, **el problema jurídico** en esta instancia, se circunscribe a establecer si las pensiones de invalidez y jubilación reconocidas por la Universidad de Antioquia, con fundamento en la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1977, deben reajustarse en los términos indicados en el párrafo 3º del artículo 3º de la Ley 4ª de 1976, o con base en las disposiciones normativas que derogaron la misma y se encontraban vigente para la fecha en que se causó el derecho pensional convencional a favor de la actora.

Pues bien, es de indicar que la Ley 4ª de 1976, estableció el reajuste automático de oficio y anual de las pensiones del sector público y privado, con base en el aumento del salario mínimo legal, promediando la diferencia con el salario mínimo más alto, de acuerdo con la fórmula que la ley misma determina, señalando además en su párrafo 3º que los reajustes “*no podían ser inferiores al 15% de la mesada respectiva para las pensiones equivalentes hasta 5 veces el salario mínimo legal más alto.*”

Con posterioridad se expidió la Ley 71 de 1988, la cual estableció en su artículo 1º, que las pensiones de que trata el artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que sea incrementado por el Gobierno el salario mínimo legal mensual, sin promedios de diferencia entre los distintos salarios mínimos establecidos; reajuste con vigencia simultánea a la prevista para el salario mínimo, previendo que la disposición es aplicable para las pensiones causadas a partir del 01 de enero de 1989 y eliminando el límite cuantitativo del 15%, que regulaba el párrafo tercero del artículo 1º de la Ley 4ª de 1976.

Frente a las pensiones del sector público de orden nacional se expidió también el Decreto 2108 de 1992, el cual reglamenta el artículo 116 del Estatuto Tributario, prescribiendo que las pensiones de jubilación del sector público nacional reconocidas con anterioridad al 1o. de enero de 1989, que presentaren diferencias con los aumentos de salario, se reajustarían por una única vez, a partir del 1o. de enero de 1993, 1994 y 1995, así: las pensiones reconocidas en 1981 y en fechas anteriores, en un 28%. Su pago se dividió en tres partes: el 12% a pagarse en 1993; el 12% en 1994 y el 4% restante en 1995., para las pensiones reconocidas de 1982 a 1988, se decretó un reajuste del 14% pagadero en dos partes: un 7% en 1993 y el otro 7% en 1994.

Y finalmente, se expidió la Ley 100 de 1993, que en su artículo 14, estableció como nueva regla, que, a partir de su vigencia, todas las pensiones con el fin de mantener su poder adquisitivo se reajustarán anualmente de oficio, el 1o. de enero según la variación porcentual del índice de precios al consumidor certificado por el DANE, para el año inmediatamente anterior; no obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán

reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incrementa dicho salario por el Gobierno Nacional.

De ahí que es dable entender que desde la expedición de la ley 71 de 1988, se modifica el reajuste pensional, para aquellas pensiones reconocidas a partir del 01 de enero de 1989, fecha desde la cual la disposición contenida en el párrafo tercero del artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, debe entenderse sustituida por la norma posterior que reguló íntegramente la materia, y para el momento de reconocimiento de la pensión convencional a la aquí demandante, **30 de junio de 1995**, es el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 el que establece las reglas para el reajuste.

Sobre la derogatoria de la Ley 4ª de 1976, y su no vigencia a partir del 01 de enero de 1989, se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia C-110 de 2006, así:

"A partir del 1º de enero de 1989 y hasta la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, todas las pensiones que fueron reconocidas en el país, tanto en el sector público como en el privado, se reajustaron anualmente conforme a la fórmula prevista en la Ley 71 de 1988, esto es, en el mismo porcentaje en que se incrementó por el Gobierno el salario mínimo legal mensual. Con la expedición de la Ley 100 de 1993 y su entrada en vigencia, las pensiones reconocidas antes y después de dicha ley, se vienen reajustando en la forma prevista por su artículo 14 y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 142 y 143 ibídem, lo que significa que el referido reajuste se produce anualmente según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, más la mesada adicional y el reajuste equivalente a la elevación en la cotización para salud, a favor de los pensionados con anterioridad al 1º de enero de 1994.

De lo anterior se concluye que, en la actualidad, a los pensionados bajo la vigencia de la ley 4ª de 1976 no se les reajusta la pensión con base en dicha ley, como equivocadamente lo sostiene el demandante, sino que, al igual que todos los demás pensionados, el reajuste se lleva a cabo siguiendo la fórmula prevista en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes.

Por eso, en la medida que el artículo 1º de la Ley 4ª de 1976 se encuentra derogado desde el año de 1988 y no está produciendo efectos jurídicos actuales, la Corte se inhibirá de emitir pronunciamiento de fondo por falta de competencia funcional, motivada en una clara sustracción de materia o carencia actual de objeto.”

Pese a lo anterior no es posible afirmar de manera tajante y categórica que, la Ley 4ª de 1976 no tenga aplicación porque fue derogada por la Ley 71 de 1988 y está por la Ley 100 de 1993 o porque en virtud de estas las partes dejaron de acudir a aquella disposición legal, pues debe tenerse presente que en el campo de la negociación colectiva, es admisible que se incorporen en la convención colectiva prerrogativas previstas en normas legales, para que permanezcan como derechos extralegales autónomos y sus efectos se extiendan más allá de la vigencia de la norma legal que los consagra, lo cual va acorde con el objeto de las convenciones Colectivas de trabajo, que, precisamente, buscan mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, a través de estipulaciones más beneficiosas que las contemplados en la ley. De allí, que entre la empleadora y la organización sindical, en una convención colectiva puedan determinar que en materia de reajustes pensionales se acojan a las reglas de la Ley 4ª de 1976, ello es, que se acuerde reproducir en el convenio colectivo de trabajo el contenido de una norma legal, la cual conservará vigencia como norma extralegal, así aquella sea posteriormente derogada, puesto que desde que se acoge y reproduce su contenido, entra a formar parte de los contratos de trabajo de cada uno de las personas que se benefician de la convención, en los términos del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo. (Sobre el particular véase las sentencias rad. 40551 de 2011, rad 43851 de 2012, SL 3781 de 2019, SL1626 de 2021, SL1776 de 2021, y SL2089 de 2021 Sala de Casación Laboral Corte Suprema de Justicia).

Sobre la interpretación de las cláusulas convencionales, la jurisprudencia especializada, ha señalado que las partes son, en principio, los interpretes autorizados, correspondiéndole al Juez señalar porque asignan determinado alcance a la norma: *"... No puede olvidarse que las convenciones colectivas no obstante su naturaleza normativa son en el recurso extraordinario una prueba más y por lo mismo los llamados a fijar su sentido, cuando las partes contratantes tienen discrepancias al respecto, son en primer lugar los jueces de instancia, quienes solamente están obligados a señalar las razones por las cuales otorgaron determinado entendimiento a la cláusula respectiva... cuando se advierta que el alcance dado por el juzgador de instancia pugna radicalmente con el contenido gramatical de la cláusula con la intención explícita de las partes al redactarla, puede entrar la Corte a infirmar dicha interpretación, por cuanto es indudable que en esta hipótesis si se está en presencia de un error protuberante de hecho."* (Sentencia radicado 23302 del 22 de noviembre de 2004)

De acuerdo con ello se tiene que la convención colectiva 1976 y 1977 suscrita entre la Universidad de Antioquia y su sindicato, en el artículo 15 estableció: *a partir de la vigencia de la presente convención, la universidad reconocerá a los trabajadores pensionados por invalidez y jubilación, el subsidio familiar, se beneficiarán de la distribución de los remanentes de que trata la convención de 1975 en el capítulo quinto; el servicio médico familiar de que trata el capítulo quinto de esta convención, las primas de junio y navidad; los auxilios por maternidad, entierro, útiles escolares, y para estudio becas. **Igualmente, la universidad dará cumplimiento a la ley 4 de enero 21 de 1976 para las personas de pensionados por invalidez y jubilación.***

Atendiendo la literalidad de dicha norma, es claro que en el inciso final las partes hicieron una remisión normativa a la ley 4ª de enero de 21 de 1976, no obstante, no se consagró el derecho específico al reajuste bajo la metodología establecida en artículo 1º, ni al límite del 15% consagrado en el parágrafo tercero, sin que se advierta dentro del proceso medio de convicción alguno que permita determinar la intención

de las partes al redactar dicha cláusula, no pudiéndose presumir que se incorporó a dicho cuerpo convencional lo establecido en la Ley 4 en lo relativo al aumento, máxime cuando la convención se expide el 23 de noviembre de 1976, ello es, durante el primer año de vigencia de la ley 4ª del 21 de enero de 1976, por lo que se concluye que la voluntad de las partes en el contrato colectivo fue el que la Universidad diera cumplimiento a la norma, mas no incorporar como ya se indicó el aumento del 15% pretendido.

De acuerdo con ello, es claro que la norma convencional no establece de manera expresa que a los pensionados se les reconocerán todos los derechos contemplados en la norma legal, dentro de los cuales se entienden contenidos el reajuste pensional del 15% de la Ley 4ª de 1976, para con ello determinar que a pesar de que esta ley haya sido derogada, sigue siendo aplicable por cuanto en el acuerdo convencional se precisó literalmente ello sin considerar su vigencia, por lo que se confirma la decisión.

Sin costas en esta instancia al analizarse la decisión en el grado jurisdiccional de consulta.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **confirma** la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario laboral promovido por **Amanda María Domínguez Porras** en contra de la **Universidad de Antioquia**.

Sin costas en esta instancia al analizarse la decisión en el grado jurisdiccional de consulta.

Lo resuelto se notifica a las partes por **estados virtuales**, artículo 295 C.G. del P. en concordancia con el Decreto 806 de 2020.

Los magistrados (firmas escaneadas)


LUZ AMPARO GÓMEZ ABISTIZABAL
Magistrada


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado

Certifico: Que el auto anterior fue notificado por **ESTADOS No. 114** fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8:00 a.m. Medellín, **01 de julio de 2021.**

Secretario